

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por el Lic. José M. Iribarren en representación de D. Valentín Vidaurreta, contra los actos del administrador de rentas de Culiacan, que se niega á recibirle en moneda de cobre las cantidades de ciento doce pesos ochenta y siete centavos contribucion federal causada por doscientos cincuenta y un tercios de azúcar y doscientos seis pesos cincuenta centavos por lo correspondiente á cuatrocientos cincuenta y nueve tercios también de azúcar.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El que suscribe llevando la voz fiscal por ausencia del promotor, emite su parecer en este negocio, del cual hace un breve extracto para mayor claridad.

D. Valentín Vidaurreta, residente en Culiacan, se resiste á pagar por una parte, ciento doce pesos ochenta y siete centavos, y por otra doscientos seis pesos cincuenta centavos, que por contribucion federal legítimamente causada, le cobra el administrador de rentas de aquella ciudad, que usando de la facultad coactiva por resistencia y oposicion al pago, procedió al embargo de una parte de las mercancías afectas á él.

Estos procedimientos son arreglados á la ley; pero el interesado tratando de evadir el pago del adeudo, recurre á un expediente que ya se vá generalizando mucho en el Estado: «la moneda de cobre.»

Tanto en el primer juicio como en el segundo, no se descubre fácilmente la verdad.

Por mas que he buscado en ambos expedientes, no encuentro esa oposicion interpuesta por el administrador de rentas para recibir moneda de cobre, segun lo asegura en sus escritos de fojas 1 y 13 el interesado.

La autoridad ejecutora del acto, asegura en su informe de fojas 8 vuelta, que no ha exigido al Sr. Vidaurreta, el pago de la contribucion federal en plata ó oro, sino solo el papel sellado que la ley designa para esta clase de enteros; de manera que, agrega y con fundada razon: que siendo el administrador de papel sellado el que rehusó la moneda de cobre, el recurso de amparo debiera dirigirse contra el que resistió recibir aquella moneda.

Siendo esto claro, ¿por qué razon se ha mandado suspender un acto reclamado que no existia?

Si se hubiese inquirido la verdad de los hechos, debia haberse resuelto esto: «No cabe el recurso de amparo que se solicita, promuévase en la forma debida y contra quien corresponda.»

Sin fijar mas la atencion en ese particular, entraré de lleno en la cuestion principal, suponiendo que la administracion de rentas de Culiacan se hubiese resistido á recibir moneda de cobre en lugar del papel sellado correspondiente, y probaré que aun en ese caso, sus procedimientos no solo han sido ajustados á la ley, sino que obrando de otro modo dicho administrador habria infringido la ley que establece la contribucion federal, contrayendo graves responsabilidades.

La circular de 24 de Agosto de 1867 recuerda á las oficinas de hacienda el cumplimiento á lo que previene el art. 5.º de la ley de 16 de Diciembre de 1861, disponiendo, que el cobro de la contribucion federal, no se haga en dinero sino precisamente en papel, como lo dispone la ley citada; y por la circular fecha 30 de Enero de 1863, queda obligado á segundo pago el causante de la contribucion federal que haga el pago de ella en dinero y no en papel, como lo previene la mencionada ley; luego si fuese cierto que el Sr. Vidaurreta ha querido pagar en cobre la contribucion federal, si se le hubiese admitido, estaria obligado á segundo pago, contrayendo el administrador de

rentas de Culiacan, la responsabilidad consiguiente.

Por lo mismo, aun en ese falso supuesto, no cabe el amparo que solicita el interesado.

Supóngase tambien que ha sido mal comprendido el negocio y que se ha buscado el auxilio de la justicia federal contra la oposicion del administrador del papel sellado en Culiacan, que se niega á recibir moneda de cobre en pago de papel para la contribucion federal, y veamos si cabe en este caso el amparo por violacion de garantías que otorga la Constitucion política.

El interesado alega, que con los procedimientos de la autoridad ejecutora que le cobra un justo adeudo, se viola la garantía concedida por el art. 16 de la Constitucion federal, y se invade la facultad que exclusivamente concede al congreso la fraccion 9ª del art. 72 del mismo código, porque el administrador le cobró en plata ú oro con exclusion de la moneda de cobre, las cantidades de ciento doce pesos ochenta y siete centavos y doscientos seis pesos cincuenta centavos, con arreglo á los diversos decretos que desde el núm. 35 fecha 31 de Diciembre de 1872 promulgados por el gobierno del Estado, han venido excluyendo dicha moneda del pago de impuestos; disposiciones con las que se ha privado á la misma moneda de su valor legal, no obstante las diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia que han declarado la obligacion en que están las oficinas de recibirla en pago de las contribuciones establecidas.

Examinemos esas razones para ver en qué consiste la violacion de garantías:

El art. 16 de la Constitucion, dice literalmente: «nadie puede ser molestado en su persona etc., sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, etc.»

Es indudable que el administrador de rentas es autoridad competente para exigir el cobro de un impuesto, que por la ley

debe cobrar; luego las garantías que concede al Sr. Vidaurreta el art. 16 que cita, no han sido violadas en su persona.

La fraccion 9ª del art. 72, dice tambien literalmente § «facultades del congreso.» «Puede expedir aranceles sobre el comercio extranjero, y para impedir por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restricciones onerosas.»

Al cobrarle ejecutivamente el administrador al Sr. Vidaurreta el importe de la contribucion federal, ¿en qué manera se violan las garantías individuales con la aplicacion de la fraccion de ese artículo, cuando no se trata de establecer en el comercio de Estado á Estado, restricciones onerosas?

Ahora bien, limitándome solo á la no admision de la moneda de cobre, he tratado de demostrar en otros asuntos análogos, y ahora insisto mas en ello: que al no admitirse esa moneda, en nada se violan las garantías que otorga la Constitucion de la República.

Primero: Porque esa moneda carece de los requisitos que ha de tener la moneda que debe circular en el país, una vez que el Congreso de la Union, haciendo uso de la facultad que le concede la fraccion 23 del art. 72, no juzgándola con las condiciones indispensables, ha mandado en sus leyes 30 de Mayo de 1873 y 1874, que sea amortizada, consignando en los presupuestos de egresos dos partidas de cincuenta mil pesos para ese fin.

El Ejecutivo mandó amortizarla y hasta la fecha se han amortizado, tanto por esta jefatura como por la aduana marítima, la suma de ciento veintiocho mil trescientos veintinueve pesos tres centavos y luego tampoco se pueden considerar violadas las garantías que otorga el art. 27 de la Constitucion política, porque hasta ahora y en virtud de los decretos de 31 de Diciembre de 1872 y Abril de 1873, no ha sido ocupada la propiedad, cuando los poseedores del cobre han tenido y tienen el derecho de dis-

poner en lo absoluto de él, sacando de su propiedad el finto que produzca; enajenándola, rematándola en las almonedas públicas, o haciendo transacciones con el Ejecutivo, como lo han hecho la mayor parte de los tenedores de dicha moneda.

Segundo: Si la suspensión que se impuso á la moneda de cobre, fué por causa de utilidad pública, excepcion que establece el mismo art. 27 tratando de favorecer en general al pueblo de Sinaloa y en particular á su comercio, cuyas transacciones mercantiles se dificultaban por la excesiva cantidad puesta en circulacion, mas de doscientos treinta mil pesos según dato oficial publicado en el núm. 8 del periódico del gobierno del Estado, fecha 20 de Febrero de 1863, así como por supuesto, notable descuento y demás inconvenientes; si no es ni puede llamarse una expropiacion, es evidente tambien que circulando de nuevo esa moneda, hasta ilegalmente emitida, pues yo hasta ahora, no he encontrado las leyes que dispusieran con las formalidades debidas su acuñacion, vendrá á perjudicar los derechos de los demás individuos de la sociedad.

Por último, hago presente esta poderosa razon: Las circunstancias en que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto que debe ser admitida la moneda de cobre, no existen ya, cuando es un hecho evidente el que no solo se ha decretado por el congreso un medio de indemnizacion, sino que habiéndose amortizado como he dicho ya, ciento veintiocho mil trescientos veintinueve pesos tres centavos, cerca de las dos terceras partes de dicha moneda, ya no caben los juicios de amparo, supuesto que no hay violacion de garantías al estarse haciendo la indemnizacion.

Ha desaparecido la causa, pero queda aún el efecto. Los deudores recurren á este arbitrio para eludir el cumplimiento de la ley, queriendo alegar como ejecutorias, otras sentencias para dejar de cumplir las providencias que las motivaron, lo que es

contrario á lo que manda la ley 20 de Enero en su art. 26.

En atencion á todo lo expuesto, el que lleva la voz fiscal concluye pidiendo:

Que no es de ampararse por la justicia federal al quejoso, supuesto que no se han violado en su persona las garantías individuales que otorga la Constitucion política del país.

Se devuelven los autos en el término de la ley, por haber sido ayer día feriado.

Mazatlan, Octubre 26 de 1874.—*Emiliano Busto.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Noviembre 3 de 1874.

Vistos: El Sr. D. Valentin Vidaurreta, comerciante y vecino de Culiacan, representado por el Lic. D. José M^o Iribarren, se ha presentado pidiendo amparo contra los actos del ciudadano administrador de rentas de la misma ciudad, por los que dice le cobra, usando de la facultad económica coactiva, en moneda de plata ó oro con exclusion de la de cobre, las cantidades de ciento doce pesos ochenta y siete centavos á título de contribucion federal que causaron doscientos cincuenta y un tercios arúcar, y doscientos seis pesos cincuenta centavos por la correspondiente á otros cuatrocientos cincuenta y nueve tercios del mismo artículo. Para conseguir el amparo, presentó una demanda sobre cada cantidad que se le cobraba; pero despues se acumularon las dos en los presentes autos á petición suya, resultando que la cantidad total contra cuyo cobro se pide amparo, es de trescientos diez y nueve pesos treinta y siete centavos.

Aparece probado en autos, que el Sr. Vidaurreta al ser requerido de pago por el empleado coactor, por las dos cantidades de que se trata, se opuso al embargo con que se lo conminaba, fundado en que el administrador de la renta de papel sellado del

lugar, no le quiso vender por moneda de cobre el papel federal correspondiente para hacer los pagos, acreditando esto con el certificado respectivo (fojas 1, 10, 11, 12 y 13.)

El ciudadano administrador de rentas de Culiacan informó, que él no exigía en plata ó oro el pago del adeudo, sino en papel de la contribucion federal con arreglo á la ley de 16 de Diciembre de 1861, y que los certificados de la oficina que allí le expende, no los estimó por bastantes para cubrirlo, y siguió sus procedimientos coactivos hasta verificar el embargo, en cuyo estado se suspendieron por orden de este juzgado.

Considerando: que el requerimiento de pago hecho al Sr. Vidaurreta, no expresa la especie en que debió verificarse, y que no ha probado que en Culiacan no hubiese papel sellado; y que se estaba en el caso de que los empleados del Estado recaudasen en moneda la contribucion federal: que si la oficina expendedora del papel, se negó á recibirle la de cobre, y este hecho viola alguna de sus garantías, el juez no puede resolver sobre ello, porque la demanda se dirige contra la exclusion del cobre hecha por el ciudadano administrador de rentas, (leyes 3 y 16, lit. 22 part. 3ª,) y quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer contra aquel funcionario. Con los fundamentos indicados, se resuelve: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Sr. D. Valentín Vidaurreta contra el cobro que le hace el ciudadano administrador de rentas de Culiacan, ejercitando la facultad económica coactiva, de la cantidad de \$319 37 cs., á título de contribucion federal sobre los derechos que pagaron al Estado seiscientos diez tercios azúcar que introdujo á esa ciudad.

Hágase saber, publíquese en el periódico de esta Ciudad, y sacándose una copia para el *Semanario Judicial*, remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

TOMO. VII.—PARTE II.

El C. Lic. Joaquín García, segundo suplente del Juzgado de Distrito de Sinaloa, en ejercicio, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó. Doy fé.—*Joaquín García*.—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlan, Noviembre 10 de 1874.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 6 de 1875.

Vistos los recursos presentados ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por el Lic. José M^a Tribarren en representación de D. Valentín Vidaurreta, solicitando el amparo de la justicia federal, contra los actos del administrador de rentas de Culiacan, que se niega á recibirle en moneda de cobre las cantidades de ciento doce pesos ochenta y siete centavos, á título de contribucion federal causada por doscientos cincuenta y un tercios de azúcar, y doscientos seis pesos cincuenta centavos, por la correspondiente á cuatrocientos cincuenta y nueve tercios también de azúcar, manifestando el quejoso que tales procedimientos constituyen una infraccion de los arts. 16 y 72 fraccion 9ª de la carta fundamental de la República. Visto el auto por el cual se mandó acumular los dos escritos; el informe de la autoridad; lo pedido por el promotor fiscal; el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos legales fundamentos, se declara: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito de Sinaloa, pronunciada en 3 de Noviembre último, cuya parte resolutive, dice: «la Justicia de la Union no ampara ni protege al Sr. D. Valentín Vidaurreta contra el cobro que le hace el administrador de rentas de Culiacan, ejercitando la facultad económica coactiva, de la cantidad de trescientos diez y nueve pesos treinta y siete centavos á título de contribucion federal sobre los de-»

rechos que pagaron al Estado seiscientos diez tercios azucar que introdujo á esta ciudad.»

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia, de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Simón Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.*

Certifico: que el C. Ministro Manuel de Castañeda y Nájera intervino en la votacion de este amparo y que por haber fallecido antes de firmarse la sentencia anterior, no aparece en ella su firma.

México, Febrero 8 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 9 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca de Juárez, por José de la Paz y otros, contra los procedimientos del C. Gregorio Calvo, comandante militar de guardia nacional del pueblo de Jamiltepec, que los juzgó y sentenció á la pena capital, considerándolos como ladrones y plagiarios de las principales autoridades de dicho pueblo.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: Que José de la Paz, Manuel López, Rafael Zavala, Apolo-

nio de la Cruz, Manuel Martínez y Santos Damian, solicitan amparo de la justicia federal contra el acto en virtud del cual trata de quitárseles la vida por haber sido condenados á ello por el C. comandante de guardia nacional, Gregorio Calvo, en sentencia pronunciada en Jamiltepec el día 25 de Diciembre del año próximo pasado. Dicha sentencia fué pronunciada en juicio que se siguió contra los promoventes con arreglo á la ley de salteadores y plagiarios, de 3 de Mayo del mismo año; y por el C. comandante Calvo, nombrado *ad hoc* por el gobierno del Estado.

Los hechos que dieron motivo á la acusacion de los referidos Paz y socios, y por los cuales se les juzgó en los términos dichos, son los siguientes:

Primero: Haber acompañado á los cabecillas Guillermo Tello, José Márrequin y Tomás Reyna, á la asonada ó rebelion que estos promovieron en Jamiltepec, en la madrugada del día 24 de Noviembre del año próximo pasado.

Segundo: Haber reducido á prision durante ocho horas, á las primeras autoridades del Distrito y al presidente municipal y alcalde primero de su cabecera.

Tercero: Haber exigido al C. jefe político José Juan Canseco, que entregase de los fondos públicos una cantidad determinada de dinero, y al C. Lic. Tereso Rodríguez juez del mismo lugar, que diese por concluidas las causas criminales que se les seguían y por las que estaban presos; y que decretase en ellas un auto de soltura.

Cuarto: Haber amenazado á las mismas autoridades con llevárselas de la poblacion, pero sin amagallas de muerte ni pretender ninguna cosa de ellas, de cuyo proyecto, si era cierto, desistieron voluntariamente desapareciendo de Jamiltepec y dejando en paz á las mismas autoridades.

Estos fueron los delitos cometidos por los peticionarios y por los cuales se les juzgó y sentenció aplicándoseles la ley de 3 de Mayo de 1873, expedida para juzgar á los sal-